Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los permisos que se han otorgado para la operación de casinos en el territorio nacional.

ESTE ASUNTO FUE PRESENTADO DURANTE LA SESIÓN DEL JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE Y CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. DURANTE SU DISCUSIÓN EL SEN. FELIPE GONZÁLEZ PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN. EN LA SESIÓN DE HOY LA PROPUESTA DEL SEN. GONZÁLEZ SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN. INTERVIÑO EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA. LA PROPUESTA DE ADICIÓN FUE ACEPTADA. EL PUNTO DE ACUERDO DEL SEN. MONREAL FUE ADICIONADO Y SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
Documento Aprobado

[Descargar Documento \(propuestadeadicion_apuestas.pdf \)](#)

PUNTO DE ACUERDO CASINOS.

RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El debate alrededor de los juegos y sorteos con apuesta ha estado presente en las últimas tres legislaturas del Congreso de la Unión, sin embargo desde la publicación del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, el 17 de septiembre de 2004, se han otorgado de forma irregular una serie de permisos para la apertura de salas de juego en todo el país.

Estas irregularidades se presentan en gran medida, debido a que el reglamento no fue elaborado con la intención de regular lo que ya existía, sino que respondió a intereses específicos de grupos empresariales.

Se trata de negocios diseñados para operar con la mitad del cuerpo en la opacidad y la otra mitad en la legalidad. Allí se lava, se tiende, se plancha y se almidonan capitales de origen dudoso. Por eso son manzanas de la discordia y bombas de tiempo para la seguridad pública del lugar donde se instalan.

Si alguna duda había sobre lo que representan realmente los casinos en México, después de la tragedia de Monterrey quedó despejada. Formalmente prohibidos desde 1938, realmente se han extendido por todo el país durante los últimos 20 años.

Hasta el año 2000, en el país existían 125 casas de juego, legales e ilegales. Pero el detonador llegó con la “alternancia presidencial democrática” del PAN. De 125 casinos pasamos en una década a 790 (un crecimiento de 632%), donde alcaldes, gobernadores y funcionarios federales por igual vieron en este negocio una jugosa fuente de ingresos, legal para algunos, ilegal para la mayoría. Tan sólo en el rubro de impuestos, el año pasado los casinos reportaron mil 200 millones de pesos al fisco. Aparte las “mordidas”, los derechos de piso y los sobornos que son parte de los “gastos operativos normales” de estos centros de juego.

Es evidente la discrecionalidad con la que Gobernación otorga permisos para la operación de los casinos ha permitido beneficiar a grupos familiares y empresariales vinculados al PAN por vínculos políticos o económicos. El consejo de administración del Casino Royale es un botón de muestra: en algún momento se integró con Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Moreno Dávila, primos de Adalberto Madero, quien fuera alcalde panista de

Monterrey en el trienio anterior (2006-2009), y responsable de otorgar el permiso de operación de bingo y apuestas deportivas al ahora tristemente célebre centro de apuestas. En el gobierno de Fox, los hijos de la señora Marta Sahagún fueron señalados en diversas ocasiones como gestores clave de la apertura de diversos casinos, la mayor parte de ellos en el norte del país.

La captura y castigo de los narcoterroristas que provocaron la muerte de 53 personas en el Casino Royale de Monterrey será un acto de justicia aislada y deficiente, si no se acompaña de otras medidas que atiendan el problema de fondo de la inseguridad que generan estos giros: la clausura de casinos y centros de apuestas irregulares, como actividad prototípica de la economía ilegal; las modificaciones judiciales pertinentes que impidan a los jueces otorgar amparos como si fueran notas de remisión; y, sobre todo, el cierre de aquellos negocios que, con independencia de su situación jurídica, representen una trampa para los usuarios en términos de seguridad y protección civil.

La página de Internet de la Secretaría de Gobernación mantiene un retraso por lo que hace a la información pública que debiera tener sobre los permisos otorgados para operar casinos, y es por ello que resulta relevante que se dote al Congreso de la información necesaria para emprender las reformas que requiere el país en este tema, por lo que, derivado de lo anterior someto a esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que informe sobre los permisos que se han otorgado para la operación de casinos en todo el territorio nacional, y que contenga cuando menos, la siguiente información: 1) Relación actualizada de casinos; 2) Nombre de los concesionarios; 3) Garantías que dejaron con motivo de los permisos; 4) Fecha en que se expidieron los permisos, así como su duración

Dado en el salón legislativo del Senado de la República a los 31 días del mes agosto de 2011.